

## EDITORIAL

# Seguridad en manos del municipio

**E**n medio del complejo escenario de inseguridad que vive el país, y en particular la región de Arica y Parinacota, la comuna de Arica se posiciona como la tercera con mayor dotación de guardias municipales entre 314 municipios, según un estudio de la Universidad Diego Portales. Con cerca de 140 funcionarios dedicados exclusivamente a labores de seguridad, el municipio ha decidido no mirar al costado y asumir una responsabilidad que, si bien no le es exclusiva, se ha transformado en una de sus prioridades.

Este esfuerzo no es menor. Incorporar 40 nuevos guardias desde el inicio de la actual administración, con un sistema de turnos y patrullajes, y una coordinación activa con Carabineros, representa un compromiso real con el bienestar de la comunidad. Pero también, y con igual fuerza, revela un síntoma preocupante: la insuficiencia

del Estado central para hacerse cargo de uno de los problemas más urgentes para la ciudadanía.

Resulta notable que Arica, con una estructura presupuestaria más acotada,



**Arica se posiciona como la tercera con mayor dotación de guardias municipales”.**

figure entre las comunas con mayor inversión en seguridad municipal. Y no es casual: responde a una realidad fronteriza, vulnerable y que requiere atención diferenciada desde el centro del país. No basta con reconocer el esfuerzo local, es urgente responder con

apoyo efectivo, con mejoras al sistema judicial y con una estrategia nacional que entienda las particularidades del territorio.

No obstante, frente a esta realidad, resulta fundamental entender que la labor municipal no pretende reemplazar a las policías, sino complementarlas. La presencia de guardias municipales en los barrios, el control del comercio ambulante, la atención de emergencias menores o la mediación de conflictos vecinales, pueden -si se planifican y delimitan adecuadamente- liberar a Carabineros de ciertas tareas, permitiendo que se concentren en lo que más se necesita: el combate directo contra el delito. Esto exige análisis, diseño institucional y voluntad política, no solo desde los municipios, sino también desde el Estado central.

La seguridad pública no puede seguir dependiendo del voluntarismo de algunos gobiernos locales.